

LA LECCION DEL PERU

Por **CARLOS JORQUERA TOLOSA**
(Enviado especial)

DURANTE las últimas horas del 2 de octubre del año pasado los teléfonos de numerosos jefes militares peruanos comenzaron a transmitir una misma frase: "Mañana es el bautizo". Era el santo y seña que indicaba el fin del gobierno civil del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el inicio de un nuevo régimen castrense en Perú, el que, al poco andar, se convirtió en el protagonista de los sucesos políticos más atrayentes de los que están ocurriendo en la América del Sur. Seis días después del golpe (9 de octubre), expropiaba el petróleo entrando así en una explosiva confrontación con el poderoso imperio petrolero de la Standard Oil Company, a la cual está estrechamente ligada la familia Rockefeller, uno de cuyos miembros más conspicuos —Nelson— fue posteriormente designado por el flamante presidente Nixon para tratar de descubrir caminos por los cuales pueda transitar, sin nuevos sobresaltos, el oprobioso dominio que el capital yanqui ejerce sobre los pueblos de este continente.

Al recuperar el petróleo, la Junta Militar de Perú produjo la primera trizadura en el mecanismo de dependencia imperialista que los países latinoamericanos (con la valiosa excepción de Cuba) soportan desde hace tantos años respecto de Estados Unidos. Al mismo tiempo, inutilizó los esquemas que hasta entonces venían aplicándose para considerar a los hombres que gobiernan estos países y para calificar los regímenes que dirigen.

Todos aquellos que, con el fin de entender lo que estaba pasando en el Palacio de Pizarro, recurrieron al recetario clásico, ahora ya no están tan seguros de sus predicciones. El Partido Comunista de Perú —frio y analítico, como corresponde— se apresuró a calificar este golpe militar como una maniobra decretada por el Pentágono, seguramente manipulada por el general Westmoreland en la VIII Conferencia de Ejércitos en Río, que habíase celebrado hacía escasos días y a la cual el Perú envió una delegación militar en-

cabezada por el general Ernesto Montagne, quien destacaba en el nuevo equipo de uniformados como Premier y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí no había por donde perderse... por lo menos durante los primeros cinco días de gobierno, porque en el sexto fue expropiado el petróleo. Entonces, "Pravda" solicitó a sus camaradas limeños que le informaran acerca de este espectacular acontecimiento que estaba saliendo de los marcos prestablecidos. Antes de emitir un nuevo diagnóstico, el PC decidió reunir a sus cuadros dirigentes para analizar la situación, a la luz de los nuevos hechos. Estaban todavía en eso cuando "Pravda" les volvió a cablegrafiar pidiéndoles información acerca de otra noticia que estaba impresionando a Moscú: la embajada peruana en Santiago de Chile había recibido instrucciones de su cancillería (dirigida por otro general: Edgardo Mercado Jarrín) para entrar rápidamente en contacto con el embajador soviético acreditado ante La Moneda, a fin de establecer las relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS. Otro motivo para prolongar la reunión y nueva razón para observar mayor cautela en la emisión de juicios maduradores.

PROCESO EN MARCHA

Por otra parte, quienes opinaron que la sola expropiación del petróleo definía políticamente a la Junta Militar en un sentido claramente ant imperialista, también han tenido que relegar su optimismo para una nueva oportunidad. Se trata de un proceso que está en marcha y muchas de sus derivaciones todavía no pueden preverse. Lo que sí puede afirmarse desde ya es que ha demostrado en los hechos que las teorizaciones previas para juzgar los sucesos políticos que se suceden en América latina han quedado en buena medida obsoletas. Un teórico del socialismo chileno, Clodomiro Almeyda, tuvo por lo menos el buen cuidado de escribir

lo siguiente respecto del papel que estaban haciendo algunos "teóricos" al aplicar esquemas rígidos para juzgar el nuevo gobierno peruano: "Para algunos se partía del supuesto que todos los ejércitos latinoamericanos eran integralmente cuerpos exclusivamente represivos que, como tales, respondían mecánicamente a la defensa del orden imperante. Y como otra premisa "teórica" también establecía que las burguesías criollas y las clases dominantes habían devenido totalmente en meros agentes del imperialismo, tenía que concluirse, de acuerdo con las más elementales reglas del razonamiento lógico, que la expropiación del petróleo en el Perú era imposible que fuese realizada por el gobierno militar. Sin embargo, la Junta Militar expropió el petróleo. Nadie sabe lo que pasará después".

Esa noche del dos de octubre de 1968, el edificio de la embajada argentina en Lima permaneció iluminado "a giorno". Tanto en Perú como en el extranjero se afirmó que las verdaderas riendas del golpe estaban en la Casa Rosada de Buenos Aires y que Onganía aparecía como el gran triunfador, al conseguirse en Lima una especie de "sucursal" de su gobierno, lo que afectaba gravemente al equilibrio político-militar que las cancillerías de este continente tratan de conservar. No obstante, la forma cómo ha continuado la Junta Militar peruana manejando su conflicto con la International Petroleum Company (IPC), no puede dejar dormir tranquilo ni a Onganía ni tampoco a Costa e Silva (otro de los señalados como "padrino" del nuevo gobierno castrense). Porque si el gobierno peruano tiene éxito, entonces el mal ejemplo puede cundir entre las filas de los militares argentinos y brasileños. La razón es que el golpe de Perú no fue caudillista; fue dado y controlado más que nada por los capitanes, mayores y coroneles. Estos son los que realmente mandan y el Presidente Juan Velasco Alvarado (general de división) es un mandatario de sus oficiales.

Y la principal razón de su fortaleza actual no reside tanto en las armas que manejan (elemento bastante importante, por lo demás), sino en el hecho de haber tocado las fibras más sensibles de la peruanidad. El conflicto con la IPC es un problema de soberanía para el pueblo peruano. No puede medirse exclusivamente desde el punto de vista técnico, económico o jurídico. Antes que nada, afecta a la dignidad de un pueblo secularmente explotado. En estos instantes, quien ataca públicamente la acción del gobierno frente a la IPC, de inmediato se constituye en "antipatriota". A la Junta Militar se la critica por otros motivos, pero nadie (por lo menos con publicidad) se atreve a protestar por su decisión de recuperar una riqueza tan importante como es el petróleo. Al Apra, que es sin duda la organización política más afecta al poder yanqui, no le alcanzan las fuerzas para oponerse cara a cara a esta expropiación, como tal vez le gustaría hacerlo a Haya de la Torre si tuviera los pantalones que dice tener, pero que se guarda de lucir. Entonces, busca el atajo más indigno: soslaya el problema, no se refiere a él y habla de

cosas que al pueblo peruano no le conmueven mayormente: elecciones, retorno de la actividad parlamentaria, etc.

Cuando la Junta Militar cerró el Congreso, nadie movió un dedo en Perú. Los eternos "patriotas" se guardaron en sus cuevas, porque el asunto parecía que iba en serio y una cosa es reclamar medidas punitivas contra un pueblo desarmado y otra muy distinta es arriesgarse personalmente por defender sus "principios republicanos".

Lo que en Perú pudiera llamarse "opinión pública" permaneció paralogizada. Es cierto, por otra parte, que en ese país un golpe militar no es un fenómeno extraño. El propio Belaúnde había ascendido al poder tras ganar unas elecciones que habían dirigido militares, un año después de que éstos derrocaron a Manuel Prado Ugarteche. Y esta paralogización todavía se conserva intacta, mientras pasan los días y se acerca la fecha fatal (9 de abril) en que vence el plazo de Nixon para aplicar las represalias contenidas en la enmienda Hickenlooper a la ley de Asistencia Externa, dictada en 1964, con el propósito de atemorizar a los gobiernos extranjeros que piensen en turbar la tranquilidad que exigen las poderosas empresas yanquis para esquilmar las riquezas de estos países.

OPINION CASTRENSE

Durante 80 años la IPC explotó miserablemente al Perú. Realmente era un estado dentro de otro estado. Además, era una fuente de corrupción que invadió numerosos estratos: políticos, periodísticos, intelectuales, etc. La necesidad de quitarle el petróleo no era nueva. Ya el 5 de febrero de 1960 (bajo la presidencia de Manuel Prado), las Fuerzas Armadas elevaron un memorándum al presidente reclamando la nacionalización de La Brea y Pariñas. Prado no se atrevió. Dos años después, los militares lo echaron y gobernaron durante doce meses, más o menos, sin ponerle tampoco el cascabel al gato. Ese papel se lo reservaron al candidato que ganara las elecciones. Fue Belaúnde quien se comprometió a resolver el problema en un plazo de 90 días.

Sólo lo vino a hacer el 13 de agosto de 1968, formalmente, pero no en los hechos. Porque el Acta de Talara que firmó y proclamó a los cuatro vientos, resultó la consagración de una actitud entreguista y gravemente dañina para los intereses nacionales.

El general de división Juan Velasco Alvarado reunió a los generales para pedirles que se pronunciaran sobre esta Acta de Talara. De 36 reunidos, 29 la rechazaron con duros calificativos. Esto significaba que había que botar a Belaúnde. Sólo dos generales no fueron partidarios del golpe y 5 prefirieron abstenerse. El resto, como tabla.

El general Velasco se preocupó de que esta decisión de los generales se deslizara al conocimiento público. Ello ensombreció el rostro de Belaúnde, quien resolvió enfrentar al discolo militar. Lo hizo, después de que jurara un nuevo gabinete, en el Palacio Pizarro. Invitó a Velasco a su despacho y ahí tuvo lugar el siguiente diálogo:

— General, Ud. me publica cosas en los diarios y después me reúne a los generales sin mi consentimiento...

— Está equivocado, Presidente. Primero reúno a los generales y después lo publico en los diarios...

— Señor, yo soy el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Ud. está obligado a obedecerme.

— Nuevamente se equivoca, Presidente. Usted no es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Sólo lo sería en tiempo de guerra y previo acuerdo del Congreso. El Jefe Supremo soy yo. Buenas tardes.

EL GOLPE

Inmediatamente Belaúnde trató de encontrarle un reemplazante a Velasco. No lo pudo hallar. A las 2.15 de la madrugada del 3 de octubre, era despertado por oficiales armados, forzado a vestirse apresuradamente (no alcanzó ni a atarse los zapatos) y conducido velozmente al aeropuerto. Un avión de APSA fue obligado a descargar todos sus pasajeros y tuvo que transportar al indignado presidente depuesto hasta Buenos Aires. Un general de aviación, Gagliardi, trató de obtener que el avión, que ya estaba en vuelo, regresara a la pista del aeropuerto "Jorge Chávez". Impartió órdenes en ese sentido desde la torre de control. Estuvo a punto de conseguirlo, pero los militares encargados de la salida de Belaúnde lo obligaron a no entorpecer la maniobra que estaban realizando.

Fue un golpe de estado incruento. No corrió una gota de sangre. Esa noche, en la Plaza de Armas de Lima, que enfrenta al Palacio de Pizarro, sólo se escucharon los gritos indignados de Francisco Belaúnde, hermano del presidente y secretario del consejo de ministros, quien sí tuvo coraje para enfrentar a los golpistas y decirles en sus caras:

— ¡Traidores, cobardes... No han sido capaces de reconquistar Tacna y Arica, pero sí son "valientes" para enfrentar a un hombre solo y desarmado...!

El hermano fue apresado, después de un violento forcejeo, y conducido a una comisaría donde quedó detenido por provocar "desórdenes en la vía pública".

¿Cómo pudo darse un golpe militar (un "madrugonazo", como lo calificó Armando Villanueva, secretario general del Apra y ex-presidente de la Cámara) sin que nadie saliera a la calle a defender la civilidad, el imperio de la Constitución? Hay numerosas razones para explicar este fenómeno. En primer lugar, el gobierno de Belaúnde se caía solo, víctima de su obsecuencia con los grandes intereses financieros, y de la gran ola de corrupción que había invadido al Perú, y de la cual la mayoría de los congresistas no eran ajenos. El Congreso era un organismo sumamente desprestigiado. Por lo tanto, cerrarlo fue una tarea en cierto modo mecánica, sin grandes alternativas. Esta sensación de que se vivía en una atmósfera corrupta se había acentuado a raíz de haber estallado un tremendo escándalo cuando ya no fue posible seguir escondiendo los faraónicos contrabandos que practicaban algunas autorida-

des, las cuales también vestían uniformes. Además hay que computar, entre los antecedentes de esta situación, el hecho de que, para julio de 1969, estaban programadas las elecciones presidenciales y todo hacía presumir que, en caso de realizarse, el candidato con más opción era Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del Apra. Ello se debía a que el Apra seguía siendo el partido que movilizaba la mayor cantidad de masas y cuenta con una buena maquinaria interna; por lo demás, el belaundismo se había dividido, a raíz de la escisión del sector llamado los "termocéfalos" que dirigía Edgardo Seoane; también estaba dividida la otra organización importante, el odriísmo, formada bajo el alero del ex dictador Manuel Odria. Así las cosas, el Apra, que conservaba el control de un tercio del electorado, aparecía como el más probable vencedor. Y ese trago sí que el ejército no estaba dispuesto a beberse, pues contra el Apra existe una especie de "veto" militar desde 1932, cuando los apristas que se atrincheraron en Trujillo, antes de retirarse de la ciudad, masacraron a veintidós oficiales que tenían prisioneros. El ejército se vengó, fusilando en Chan-Chan (a 10 kilómetros de Trujillo) a un número de apristas que se calcula en tres mil. Desde entonces, pende sobre el Apra la maldición castrense que siempre se le cruza en su camino hacia la Presidencia de la República.

A la fecha del golpe, las libertades públicas habían sido cercenadas por Belaúnde. A la cárcel habían sido arrastrados el secretario general del PC (Jorge del Prado) y otros dirigentes comunistas. También estaba perseguido el Frente de Liberación Nacional, organización izquierdista. Recuérdese, además, la ferocidad con que el gobierno de Belaúnde combatió los estallidos guerrilleros; todavía no aparecen los cadáveres de algunos de los dirigentes más destacados de las guerrillas, como Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, Paul Escobar, etc. En fin, era un secreto a voces que se estaba gestando un golpe de estado. Los bien informados se entretenían fijándole fecha; parece ser, de todos modos, que la mayoría se sorprendió porque pensaban en que ocurriría en una fecha más cercana a las elecciones. Pero es que estalló el escándalo del Acta de Talara y la desaparición de la célebre "página once", de esa documentación. Esto hizo de detonante.

EL ACTA DE LA VERGUENZA

Para entender el contenido del Acta de Talara firmada por Belaúnde, hay que tener presente que el negocio total del petróleo comprende tres fases importantes: la extracción, la refinación y la comercialización. Las verdaderas ganancias se producen en las dos últimas, porque la primera se refiere a instalaciones viejas, que reclaman rápida modernización o reemplazo. El Acta de Talara expropiaba precisamente las instalaciones, dejando lo más jugoso en manos de los yanquis. Y en cuanto a la "página once", en ella se establecía el pago que debería hacer la IPC, con la particularidad de que esta suma se calculaba en soles y no

en dólares, como se hacía en las diez páginas anteriores que contenían las obligaciones del Estado peruano. Este hecho fue denunciado y los culpables prefirieron hacer desaparecer la página de marras.

Un mes después del golpe (7 de noviembre), Velasco pronunciaba un discurso ante la División Blindada, en el que manifestaba: "El gobierno anterior, nacido legítimamente por voluntad popular en 1963, se prostituyó y se hizo ilegítimo en su ejercicio con el servicio incondicional a los intereses de grupo, al proporcionar apoyo a los apetitos económicos de quienes en casi toda nuestra vida republicana hicieron escarnio de nuestra soberanía y nos explotaron con alma de traficantes de esclavos".

Pudieran darse otros antecedentes sobre el golpe, pero sería abundar sobre el mismo punto. Debería agregarse, quizás, que paradójicamente en Perú se observa mayor libertad ahora, bajo la Junta, que durante el gobierno de Belaúnde. Es claro que no existe el Parlamento, pero sólo lo echan de menos los ex congresales y el inmenso cardumen de "acomodados" que profitaba de él. Pocos días después del golpe, el Ministro de Gobierno, general Armando Artola, en una conferencia de prensa se refirió a algunos hechos que demostraban el "dispendio" de que hacía gala el Congreso. Algunos ejemplos: había dos empleados que trabajaban sólo 15 días al año y, naturalmente, cobraban sueldos suculentos; nueve trabajaban en una universidad y también recibían pago del Parlamento y 20 trabajaban en empresas particulares y sólo aparecían por la ventanilla de pagos del Congreso a retirar sus sueldos. Por supuesto que la mayoría parlamentaria se las había arreglado para encontrar las billeteras de los "honorables": mientras los empleados públicos no podían ganar más de 25 mil soles por mes (un dólar igual a 43,5 soles), los parlamentarios se habían autofijado una "dieta" de 42 mil soles mensuales. Los 45 senadores tenían 683 funcionarios a su disposición (proporción: 15 funcionarios por senador). Los 140 diputados aparecieron un poco más "austeros": sólo tenían 526 funcionarios. En esta denuncia pública del Ministro Artola, también se hizo referencia a otros hechos no menos curiosos, como fue destapar la olla en que se cocinaban los numerosos viajes que los parlamentarios emprendían al extranjero, espléndidamente financiados con dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, el viaje para concurrir al Rotary Internacional de Denver, EE. UU. Bueno, por lo menos en este caso se precisó el destino, porque hubo muchos otros en que esto se mantuvo en penumbras: no sólo el destino del viaje, sino la identidad de los acompañantes de los parlamentarios. También es cierto que en estos últimos casos, un elemental deber de caballerosidad aconsejaba guardar silencio, porque daba la casualidad de que en muchas ocasiones las acompañantes de los "honorables" no eran precisamente sus esposas legítimas sino algunas amigas íntimas. Tampoco esto tendría mayor importancia, si no fuera por el hecho de que estos placeres los pagaba el Estado, es decir, los contribuyentes.

Es fácil entender, entonces, por qué el cierre del Congreso no sólo no despertó protestas ciudadanas sino que se convirtió en una decisión simpática para el pueblo.

CORRUPCION EN LA CTP

Otro organismo que teóricamente "debía" haberse jugado claramente por la defensa del presidente constitucionalmente elegido, era la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), controlada por el Apra. La verdad es que la directiva trató de declarar una huelga general, pero no encontró apoyo en las bases. Es que se trata de una organización mediatizada, sin un exacto sentido de clase y es más bien un pilar del sistema burgués imperante. Es filial de la ORIT y esta organización proimperialista la gratifica con dólares. En la práctica, es manejada por el agente yanqui Arturo Jáuregui desde México.

La corrupción de esta organización llega al extremo de haber recibido dos millones de dólares de parte de la propia IPC para la construcción de una nueva sede social. Y frente al problema actual del enfrentamiento entre el Estado peruano y esta compañía imperialista, en lugar de estar movilizada en defensa activa de la soberanía de su país, ha enviado una delegación sindical a EE. UU. para mendigar a las autoridades yanquis que no apliquen medidas de represalias.

Hace pocos días, dirigentes de la Agrupación de Empleados Particulares se entrevistaron con algunos de los militares que gobiernan Perú. Estos les dijeron: "Ustedes se califican de revolucionarios, ¿no es cierto?... Y dicen que no pueden hacer la revolución porque no tienen las armas para pelear. ¿Cierito también?. Pues bien, nosotros tenemos las armas. Pliéguense a nosotros, ayúdenos y juntos hagamos la revolución".

Los dirigentes de la Agrupación aún no se reponen de su asombro.

Por lo demás, esta clase de lenguaje no es extraño en Perú, en los momentos presentes. El Presidente Velasco, en una entrevista publicada a comienzos de enero por una revista limeña, dijo lo siguiente:

"Estamos actuando con mesura, con tranquilidad, sin deseos de provocar, pero dispuestos a que la revolución comience, desde los cimientos, para llegar hasta las más altas capas de nuestra estructura y de nuestra población. No podemos detenernos, porque somos la última oportunidad. Y eso lo sabemos nosotros y lo adivina el pueblo peruano. Quien se oponga sufrirá las consecuencias. Seremos implacables y estamos dispuestos a pasar sobre miles de cadáveres, a morir en la demanda, para lograr el cumplimiento de nuestros postulados, que están escritos, que el pueblo conoce. Yo ofrendo y ofrezco mi vida, en holocausto del Gobierno Revolucionario y de la transformación del Perú. Nada me importa. Cualquier tiempo es bueno para morir. Y mejor si se muere peleando por lo que se ama. Los contrarrevolucionarios quedan avisados y notificados. Esta es una lucha sin cuartel. Podrán morir todos los miembros del Gobierno Revolucionario, todos sus ministros y dirigentes, pero tras de ellos hay sucesivas capas de soldados que seguirán bregando sobre

nuestros despojos. Detesto la sangre y la violencia, porque todo padre de familia —y yo lo soy de cuatro hijos— desea la tranquilidad. Pero no me tembrará la mano para liquidar a los enemigos del Perú, sean internos o externos”.

En la misma entrevista, dijo posteriormente:

“Nosotros, los militares, los aviadores, los marinos, pertenecemos al pueblo. Formamos parte del pueblo y de la clase media”.

LOS CORONELES “IDEOLOGICOS”

La mención que hace el general Velasco a las “sucesivas capas de soldados” que están detrás de los generales, quiere significar que el gobierno castrense no se instaló por la decisión de un grupo de generales, sino más bien por la voluntad de un sector numeroso de oficiales jóvenes que respaldan a aquéllos y en buena medida los controlan. En Perú se habla bastante de los “coroneles ideológicos”, para referirse a aquellos coroneles que han hecho estudios socioeconómicos sobre la realidad de su país. Y cualquiera persona que estudie un poco esta realidad tiene que llegar a una sola conclusión: es urgente la transformación estructural de la sociedad peruana. El problema, para algunos, consiste en que los institutos armados no han sido formados para cumplir esta tarea, la cual debería estar reservada a los políticos sin uniformes. Los militares peruanos responden diciendo que a tales políticos se les dieron todas las oportunidades y que ninguno se atrevió a emprender esta misión. Agregan que prácticamente imploraron a Belaúnde que iniciara el período de las transformaciones sociales, teniendo en claro que, para ello, había que luchar contra poderosos intereses económicos. Belaúnde tampoco se atrevió.

El último gabinete de Belaúnde fue una muestra del ánimo que tenía. Estaba presidido por un acaudalado señor apellidado Mujica Gallo. Es el propietario del Museo “Mujica Gallo” o “Museo del Oro”, ubicado en sus posesiones de las afueras de Lima, que es uno de los sitios más fabulosamente ricos que existen en este continente. En numerosos salones se muestran objetos de oro y piedras preciosas, la mayoría pertenecientes a culturas preincaicas cuyo monto es imposible de avaluar. Es un sitio de visita obligada para los turistas y para quienes se interesan por las culturas primitivas que imperaron en Perú. En cierto modo sirve también para tener una idea acerca de cuál será la fortuna personal de este caballero. Este gabinete fue el menos malo de los que ha tenido Perú. Como apenas duró unas cuantas horas, los ministros no alcanzaron a firmar ningún decreto y ya nadie se acuerda de quiénes fueron exactamente sus integrantes.

¿DEMOCRACIA CON UNIFORME...

Para los chilenos resulta curioso escuchar a militares que se autotitulan demócratas, después de derrocar a un presidente elegido legalmente y de clausurar el Congreso. En la entrevista que el Presidente Velasco concedió, con carácter de exclusiva, al programa “A

Ocho Columnas” del Canal 9 de la U. de Chile, se declaró demócrata y defensor de la democracia, si bien a renglón seguido dijo que habían cerrado el Parlamento porque éste no estaba de acuerdo con los postulados de la Junta Militar. Hablando en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Velasco dijo el 30 de noviembre:

“Por paradoja del destino, los integrantes de la Fuerza Armada conocemos y valoramos el sublime y excelso contenido del término democracia; por ello estamos luchando hoy. Pero también tenemos plena conciencia de que para lograr una democracia a la peruana, primero necesitamos asegurarle a la Patria independencia, soberanía, autoridad y dignidad; quien piense que esta democracia puede fructificar sin esos requisitos, no conoce su significado o, interesadamente, pretende ignorarlo”.

Y veinte días más tarde, en una ceremonia militar, expresó:

“La misión de la Fuerza Armada no es gobernar; pero, tampoco puedo decirnos en este momento, que ella se debió concretar a la de permanecer en sus cuarteles, en tanto que el país se precipitaba hacia su desquiciamiento con pérdida total de su dignidad y soberanía. Cuando el país encuentre el camino de la superación que tanto precisa, la Fuerza Armada regresará al seno castrense, sin que el lodo de la codicia la hubiere salpicado, ni la vanidad o ambición del poder la hayan cegado”.

Ellos, los militares peruanos, se llaman a sí mismo “nacionalistas y revolucionarios”. No obstante, esto no basta para ubicarlos con precisión dentro del espectro ideológico imperante hoy día. ¿Quién no es nacionalista en estos momentos? Y “revolucionarios” hay de todos los colores, desde el que construye realmente un mundo nuevo, como se está haciendo en Cuba, como el que se preocupa en afirmar el sistema imperante, como lo estamos observando en Chile.

... O SOCIALISMO INCIPIENTE?

Un destacado político de izquierda peruano, y ex diplomático, en una conversación con el autor de este reportaje, calificó el régimen peruano de “socialismo incipiente”, lo que tampoco es mucho decir.

El peligro de etiquetar a los gobiernos latinoamericanos consiste en que con ello se pierde mucho tiempo y muchas veces resulta que los rótulos no calzan ajustadamente y se producen tremendos dolores de cabeza. Así por ejemplo sucedió con Antonio Arguedas, que también se arrancó del esquema y mucha gente todavía no consigue ubicarlo en el anaquele ideológico correspondiente, preocupándose más de este hecho adjetivo que de precisar a qué intereses sirva o ataca. Los gobiernos, especialmente los latinoamericanos, deben calificarse por los hechos que protagonizan más que por las declaraciones que suscriben. Y los hechos que definen son los que significan enfrentamiento a los grandes intereses imperialistas, porque son éstos los que impiden el desarrollo de los pueblos. Así, quien se atreva a enfrentarlos con decisión, sentirá tras de sí el respaldo de su pueblo, ya vista

con sotanas, use mandiles o luzca galones.

En todo caso, resulta difícil detectar cuál es el norte "ideológico" de la Junta. Hay hechos que apuntan para un lado y otros para el lado contrario. Tal vez por la vía de la eliminación de lo que la Junta no ha hecho, "todavía", y que era ingrediente normal de los primeros actos y declaraciones de otros golpes militares, interesa anotar que no ha formulado ninguna declaración anticomunista. Llama la atención este hecho, si bien tampoco la define como partidaria o simpatizante del mundo socialista. No hay comunistas en puestos de importancia, pero sí hay muchos hombres de derecha en cargos claves. El Presidente Velasco dijo, poco después del golpe, "Pedimos la colaboración de los buenos peruanos; no importa si son de derecha, de izquierda o al rojo vivo".

El "rojo vivo" no se divisa en los altos escalones administrativos.

Algunos hitos de referencia útiles para calibrar políticamente a la Junta podrían encontrarse, quizás, en la argumentación que hiciera el canciller Edgardo Mercado Jarrín, en un almuerzo íntimo, al señalar que el mundo se encontraba dividido en dos bloques: capitalista y socialista, ninguno de los cuales es "puro" absolutamente; es decir, ni uno es netamente socialista ni el otro es netamente capitalista. Explicó que en EE. UU. la empresa privada está sometida al control estatal y que en la URSS se observan liberalizaciones propias de una sociedad de consumo. Por lo demás, agregó, hay otros países capitalistas que han adoptado prácticas socialistas, como Suecia e Inglaterra. Pero, hay también un tercer bloque, formado por los países en desarrollo. Esta realidad mundial hace que el Perú no pueda ubicarse plenamente ni con el capitalismo ni con el comunismo, si bien pudiera mostrar una relativa proclividad hacia las experiencias socializantes que tienen lugar en otros países.

OTRAS HIPOTESIS

Muchos creen encontrar la fuente de nutrición ideológica del gobierno peruano en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), una especie de Academia de Guerra chilena. No todos los cursos que se siguen en el CAEM son dictados por militares. Se sostiene que en este organismo los alumnos adquieren una conciencia "desarrollista" que los impulsa a perder la paciencia cuando observan la pasividad civil para afrontar la solución de los apremiantes problemas sociales. En homenaje a esta conciencia "desarrollista" algunos oficiales de alta graduación sienten especial satisfacción al declarar que las derrotas sufridas por los estallidos guerrilleros en las zonas campesinas no son atribuibles tanto a la fuerza militar que los atacó sino a las medidas de transformación social que se adoptaron en esas regiones, especialmente la Reforma Agraria. Pero esa argumentación exige un análisis más meditado. Lo cierto es que el ejército desarrolló una gran acción militar para atacar la efervescencia guerrillera y que muchos de los prisioneros deben haber sufrido tratamientos tan bestiales que posteriormente no

se han atrevido siquiera a mostrar sus cadáveres.

Pero, más que en el CAEM, pareciera que el organismo que incubó a los generales que gobiernan en Perú fuera el Servicio de Inteligencia. Muchos de los generales-ministros más influyentes pasaron por ese servicio y algunos de ellos, como el Ministro de Gobierno, Armando Artola, lucen su condición de expertos en guerra psicológica. No se conoce la extensión de los conocimientos del General Artola en esta especialidad, pero lo cierto es que muchos le tiemblan y algunos órganos de prensa han pedido insistentemente su salida del gobierno.

Otros los llaman "neo-peronistas", o "nassestistas", etc. Por lo pronto, el Presidente Velasco no da muestras de inquietarse en lo más mínimo por este apresuramiento en encontrarle una brújula ideológica a su gobierno. El ideario de la Junta dice, está en un folleto titulado "La política del Gobierno revolucionario", confeccionado sobre párrafos de discursos pronunciados por él.

La definición política verdadera de la Junta Militar irá conformándose a la luz de las actitudes que adopte, frente a hechos concretos. En este instante, el problema está planteado principalmente con la compañía petrolera IPC. Pero esta "película" tiene dos protagonistas: uno es Perú y el otro Estados Unidos, que salió en defensa de la compañía. De aquí que las preguntas sustanciales en estos momentos sean dos, íntimamente ligadas entre sí: ¿qué hará el gobierno peruano si los yanquis le aplican represalias? Y la otra: ¿qué hará Estados Unidos si los peruanos no echan pie atrás en el petróleo?

Cuando estas dos interrogantes sean respondidas por los hechos reales, los analistas políticos tendrán donde afirmarse para elaborar sus tesis.

LOS PARTIDOS POLITICOS

Todavía quedan algunos que piensan en que tal vez la Junta debería constituir un partido político propio, que le diera sustentación civil. Sin embargo, no se conoce ninguna declaración de algún jefe militar que permita entrever esta intención que, por lo demás, de concretarse no aclararía mucho las cosas y lo más probable es que contribuyera a enturbiar aun más el actual panorama que presentan los partidos políticos peruanos.

En este sentido, hay partidos para todos los gustos y de todos los tamaños. El más fuerte es el Apra, que hoy protesta por el golpe militar, pero que, durante Belaúnde, trató infructuosamente de conseguirse algún general que le sirviera de mascarón de proa para un cuartelazo. Sin ir más lejos, algunos apristas visitaron repetidas veces al general Montagne (actual premier) para proponerle un golpe de estado. Pero ahora sacan a relucir el disfraz "constitucionalista" y piden elecciones libres y el "retorno a la normalidad institucional". Esto debería entenderse como el regreso de Belaúnde, que sería la manera lógica de volver las cosas a su estado anterior. Pero no. Reclaman que les permitan hacer elecciones, seguros de que Haya de la Torre se impondría.

Hasta hace pocos días, Haya de la Torre se encontraba en el extranjero. Dos días después de su regreso a Lima se realizó una gran manifestación pública (fue el viernes 21 de febrero) que, según los observadores, fue la más grande de todas las efectuadas hasta el momento. Por lo pronto, el Apra reunió más gente que toda la que ha podido juntar públicamente la Junta Militar. El discurso de Haya era esperado con natural interés. Habló alrededor de una hora y —¡cosa asombrosa!— no se refirió para nada al problema más neurálgico del momento: el petróleo. Repitió sus gastados estribillos acerca del cambio de un “amo por otro” (alusión a las relaciones con la URSS y otros países socialistas) e insistió en que hay imperialismos buenos e imperialismos malos. La verdad es que para esta especie de “señora curiosa” de la política peruana sólo hay un imperialismo bueno: el norteamericano. Todos los demás son repudiados.

Llamó la atención el hecho de que la Junta autorizara una concentración política en la que se sabía que se le harían duros ataques. Tal vez lo hizo para demostrar a la opinión extranjera que era mucho más tolerante que el gobierno de Belaúnde. Pero, algunos militares no se quedaron a brazos cruzados después de escuchar los ataques de Haya de la Torre. Horas más tarde, los periódicos traían una información sensacional, que todos destacaron en sus primeras páginas: la policía había “frustrado” una conspiración para asesinar a Haya, en la noche del mitin. Un grupo de individuos se había concertado para matar al jefe aprista con un rifle con mira telescópica, así como fue ultimado Martin Luther King. Es claro que hay una diferencia tremenda entre el líder negro y el timonel del aprismo. Pero, bien podría ser que se hubiera pretendido repetir en Perú los sucesos colombianos que estallaron con ocasión del asesinato de Eliecer Gaitán. Sin embargo, la cosa tomó otro cariz cuando se informó acerca de quien aparecía como jefe del grupo homicida: nada menos que Silvio Arroyo García, el popular “Silvio”, famoso peinador de damas de alta sociedad y conocido en todo Perú como un “mariposón” sin remedio. Ya el asunto se circunscribía a un lío entre Silvio y Víctor Raúl, que también puede considerarse de la “alta sociedad”, sobre todo ahora que aumentará sus caudales propios con una herencia de seis millones de soles que le dejó el magnate brasileño —e insigne invertido— Assis de Chateaubriand. Más tarde, tanto Silvio como los demás detenidos fueron puestos en libertad y el sorprendido peinador declaró a los periodistas que “admiraba a Haya de la Torre y que jamás se atrevería a atentar contra su vida”.

Días después del golpe del 3 de octubre, el Apra celebró su XVI Plenario. Según los comentarios de la prensa especializada, fue posible advertir tres tendencias en su seno: a) una encabezada por su secretario general, Armando Villanueva, que propone una oposición con cautela. Según el diario aprista “La Tribuna”, Villanueva habría manifestado: “Está bien que seamos valientes, pero no tontos”; b) otra partidaria de una posición no tan cautelosa sino más resuelta, dirigida por Ra-

miro Prialé y partidaria, además, de entregarle la dirección del partido a unos “comandos de acción” que deberían constituirse para tales efectos; y una tercera, que le gustaría acercarse a la Junta Militar, encabezada por Fernando León de Vivero. Sea como fuere, el hecho es que Haya sigue siendo el jefe, rodeado de sus “búfalos” y sus “dorados”, y el Apra no da visos de atreverse a caminar sin el alero de Estados Unidos. No sería extraño que este afán por mantener las actuales estructuras convirtiera rápidamente a este partido en uno de los principales causantes de futuras tensiones sociales.

El odrismo (partido de Odría), está curiosamente “mudo” y también presenta disensiones internas. Existe también el “pedrismo”, partido de Julio de la Piedra, grupo pequeño pero con bastante dinero, que, en el fondo, se comporta como una suerte de tributario del Apra. Otro partido es el Movimiento Democrático Pradista que, junto con apoyar a la Junta en la cuestión petrolera, también reclama elecciones. Prado es dueño del Banco Popular y, como banquero, no le conviene alejarse mucho del gobierno instalado. El Partido Popular Cristiano tiene una fuerte orientación derechista y es enemigo furibundo de la Junta. Pero éste, ni el pradismo poseen fuerzas suficientes como para provocar una alteración sustancial en el panorama político. Más numeroso es el Partido Acción Popular, de Belaúnde, que sufrió una seria división entre el “belaundismo” (enemigo rabioso de la Junta) y los “termocéfalos” de Edgardo Seoane (apoyo “crítico” a la Junta); según los observadores, este sector tiende hacia una mayor “izquierdización” y en su seno ya se han escuchado proposiciones para constituirse en una especie de partido “socialista no marxista”. Con estos “termocéfalos” sucede algo curioso: sostienen que dividieron el PAP porque son “leales a los principios”, en vista de lo cual ahora anuncian que van “a cambiar los principios...”. Existe además el Partido Socialista del Perú, sin mayor significación, y la Democracia Cristiana que, en su curriculum, presenta el extraño fenómeno de haber sido el primer partido democristiano en el mundo que discutió seriamente (y casi lo aprobó) una alianza electoral con los partidos marxistas. Es interesante observar lo que está ocurriendo con la juventud de este partido, que demuestra una posición claramente izquierdista y pudiera decirse que bordea el “guerrillerismo”. El último Congreso de la juventud DC (celebrado bajo este régimen) fue dedicado a la memoria del Che Guevara. Todavía Héctor Cornejo Chávez conserva gran poder como dirigente principal de la democracia cristiana peruana, pero es probable que esta situación varíe en un futuro cercano debido, precisamente, a que sus cuadros juveniles avanzan ideológicamente a una mayor velocidad. También resulta interesante observar que la juventud democristiana no reclama elecciones, como las demás entidades políticas, y que, en lo que concierne a la lucha contra la IPC, está decididamente al lado del gobierno (se negó a participar en un “frente civil” que proponía el Apra para oponerse al golpe de estado). El partido Co-

munista Peruano, de indudable lealtad con Moscú, no es una organización muy desarrollada y, después del desconcierto que sufrió cuando la Junta nacionalizó el petróleo y estableció relaciones con las URSS, no puede esconder sus simpatías con las medidas más espectaculares que está aplicando el Gobierno. Naturalmente, a ello hay que agregar el hecho de que los militares no los persiguen y que ahora sus cuadros más destacados pueden lucirse como anfitriones de los flamantes diplomáticos socialistas. Existe también el PC de tendencia pekinesa, sin gran influencia en la masa trabajadora, pero con mucha importancia en las universidades. Lo curioso es que consideren que su "principal enemigo" es el PC de Jorge del Prado; están de acuerdo con la lucha guerrillera, si bien se preocupan en declarar que, antes de alzarse en armas, es preciso fortalecer el partido. El MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fue el ala más consecuente que se desprendió del Apra, bajo la dirección de Luis de la Puente. Su figura principal en estos instantes es Ricardo Gadea (preso). Es partidario declarado de la insurgencia armada. Su maquinaria es reducida, pero tiene un gran prestigio de orden moral (recibe el apoyo de sectores trotskistas). Todavía existe otro grupo político: la Vanguardia Revolucionaria, de origen trotskista, que gusta declararse anti-guerrillera y conserva algunas bases en sectores universitarios; la mayoría de sus militantes son intelectuales y su principal labor de difusión la cumplen por la vía editorial.

Naturalmente aún quedan otros grupos muy pequeños, que sólo decoran este verdadero árbol navideño de la política peruana. Todos ellos, grandes y chicos, funcionan con libertad. Ninguno ha sido arrastrado a la ilegalidad todavía, si bien nadie se atreve a predecir que esta situación vaya a prolongarse por mucho tiempo.

En cuanto a la prensa, a fines del año pasado la Junta Militar hizo sentir su garra sobre determinadas publicaciones, clausurando la importante revista "Caretas", el periódico "Extra" y también las emisoras "Radio Continente" y "Radio Noticias". Algunos periodistas fueron a prisión. Hubo la natural protesta del gremio y, después de alrededor de quince días, la situación tornó a la normalidad, si bien pareciera que algunos "entendieron" la lección que los militares querían enseñar.

Respecto de los presos políticos, hay que decir que varios personajes que ocuparon puestos importantes en anteriores gobiernos han preferido respirar aires extranjeros antes de exponerse a ser procesados por el gobierno militar. Tres ex ministros de Belaúnde han sido enjuiciados por concusión (exacción arbitraria cometida por funcionario público en provecho propio), pero tuvieron el buen cuidado de cruzar las fronteras. Sus nombres: Pablo Carriquiry, Manuel Ulloa y Guillermo Hoyos Osoreo. Hay otros altos personajes que también han sido llevados ante la justicia ordinaria.

En cuanto a las deportaciones violentas, se conocen dos casos importantes; simultáneos

entre sí pero de distinta significación: uno fue José María de la Jara (secretario general del Partido Acción Popular, belaundista) y Eudocio Ravinez. El problema para el primero fue que lo expulsaran casi junto con Ravinez, lo que tiene que haberle aumentado notoriamente su mal rato. A través de la prensa se han podido conocer numerosas protestas por la acción de que ha sido víctima este dirigente político; en cambio, ninguna palabra se ha alzado para protestar por la expulsión de Ravinez. En este último caso se observa una extraña unanimidad a favor de tal medida. Se trata de un individuo muy conocido en Chile, cuando oficiara de dirigente internacional del comunismo, que volvió a cobrar notoriedad al pasar públicamente a encabezar cualquiera campaña que atacara al PC. con la sola condición de que ella fuera generosamente financiada en moneda dura. No se demoró en cumplir la orden de defender a la IPC. La cumplió dócilmente, cobrando jugosos dólares y matizando sus intervenciones en un programa de televisión con reiterados y malévolos ataques contra Chile. Precisamente trataba de desviar el sentimiento nacionalista que había despertado la embestida contra la compañía petrolera (su patrón más generoso) reavivando antiguas querellas entre Perú y Chile. Personajes similares a él existen en otros países latinoamericanos y en Chile también tenemos ejemplares de la misma especie.

Tal vez la Junta Militar no se hubiera preocupado mayormente porque tanto De la Jara como Ravinez continuarán sus ataques, bien distintos entre sí. El problema fue que ellos incursionaron en un terreno que los militares consideran vedado: la unidad entre los uniformados. Especialmente Ravinez quiso sacar a flote divergencias internas entre los militares, las que no son difíciles de encontrar, considerando que éstos han copado la administración pública, al extremo que se calcula que un 40% del ejército está dedicado ahora a labores propias de civiles. Esto, además de debilitar notablemente el funcionamiento interno del ejército, crea flancos sensibles por los cuales puede trizarse la uniformidad de criterios. Los militares pierden los estribos cuando se les plantea esta posibilidad y mucho más cuando alguien trata de hacer causal político de tal situación. Entonces, la bota militar pisotea sin tapujos.

ORIGEN SOCIAL DE LOS MILITARES

Los generales cuyos nombres ocupan el primer plano del poder gubernativo tienen distintos orígenes sociales. Velasco Alvarado no nació en cuna de oro, sino en una casita de provincia (Piura); su padre fue un modesto empleado del Ministerio de Hacienda, tiene un hermano maestro y otro militar. El mismo comenzó de soldado, lo que indica que, antes de alcanzar el más alto grado institucional, recorrió todos los escalones. Es católico y está casado con la hija de un viejo militante del Apra (González Posada).

Bastante distinto es el "curriculum vitae" de otros dos generales muy influyentes: Ernesto Montagne y José Benavides. El primero (Pri-

mer Ministro y Comandante en Jefe del Ejército) es hijo de un ex general al que el Apra pretendió postular a la Presidencia, hace varios años. Es cuñado del Cardenal Juan Landázuri, célebre por su posición ultrarreaccionaria. El segundo es hijo del ex presidente Mariscal Oscar Raúl Benavides y primo de quien fuera gerente general de la Cerro Pasco Corporation (empresa norteamericana que explotaba un inmenso latifundio). Ha estado estrechamente ligado a intereses yanquis, al grado de ocupar —en calidad de “experto”— un cargo en el directorio de la Sociedad Explosivos Cerro Pasco, subsidiaria de la anterior. Ocupa actualmente el Ministerio de Agricultura, encargado de aplicar la Reforma Agraria. Hay que decir que se la aplicó a la Cerro Pasco, si bien no fue tan drástica como algunos la deseaban.

Tanto Montagne como Benavides fueron jefes del SIM (Servicio de Inteligencia Militar). También lo fue el Ministro de Gobierno, Armando Artola, que es con cuñado del general Angel Valdivia, que ocupara el Ministerio de Hacienda.

Para completar una visión general sobre el panorama actual del Perú, es necesario mencionar, todavía, a dos entidades que juegan importantes roles en el desarrollo de los acontecimientos: las universidades y la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

LOS UNIVERSITARIOS

Aplicando también el recurso de la sorpresa, la Junta Militar se descargó sobre las universidades, proclamando la Ley Orgánica de la Universidad Peruana que, en síntesis, pretende cortar de raíz los brotes de rebelión estudiantil que estallan frecuentemente en las numerosas casas de altos estudios, la mayoría de las cuales están encabezadas por elementos de la izquierda más radicalizada. El contenido político de esta acción gubernativa puede apreciarse inmediatamente si se considera que la extrema derecha comenzó a aplaudir frenéticamente apenas se conocieron las disposiciones de esta nueva Ley. El 21 de febrero el diario “La Prensa” (perteneciente al magnate Pedro Beltrán) publicaba un editorial titulado “Ley Universitaria: gran acierto que no hay que dejar frustrar”. Esta legislación consagra la discriminación política entre los universitarios, al establecer la separación inmediata de cualquier alumno o catedrático ante la “subjetiva calificación de estar realizando actividades de proselitismo partidario”. La exacta reacción estudiantil todavía no se conoce en su verdadera expresión debido a que las vacaciones se prolongan hasta abril.

Resulta difícil comprender el por qué los militares peruanos, a los que les gusta aplicar sus conocimientos tácticos en la acción gubernativa, han considerado conveniente abrirse un frente interno en contra, cuyas proyecciones nadie puede vaticinar con exactitud, pero que, en todo caso, permite afirmar desde ya que será motivo de duros enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los universitarios. A todas luces parecería que

aquí les está fallando la táctica. Sin embargo, una visión más panorámica de la situación del continente hace posible la comprensión de esta medida: ella está inscrita en un plan ordenado por Estados Unidos para aplicarse en todos los países que siguen sus dictados. Los yanquis piensan que el mayor peligro de ruptura del sistema actual puede provenir de la insurgencia juvenil, especialmente de la juventud estudiosa. Onganía también está aplicando una legislación igualmente represiva en las universidades y recientemente en Chile se han conocido las primeras manifestaciones de este plan continental, a raíz del inusitado caso de los 14 profesores argentinos.

La Junta Militar dice que pretende formar profesionales que estén acordes con el desarrollo económico acelerado que piensan imprimirle a la sociedad peruana. ¿Qué clase de sociedad será esa que requerirá de profesionales “asépticos”, es decir, de científicos con anteojeras que no se conmuevan ante la realidad que los rodea? Resulta ingenuo pensar en incubar este tipo de profesionales universitarios, más cuando los propios militares están dando el ejemplo contrario, al invadir el amplio campo reservado a la civilidad y esgrimiendo, precisamente, el pretexto de que no han podido desoir por más tiempo el reclamo de las urgencias sociales.

Mucha gente está de acuerdo en que las numerosas universidades que existen en Perú no cumplen, ni con mucho, las exigencias del momento. Todo el mundo piensa que deben ser reformadas y modernizadas sus planes de estudio. Pero eso es muy distinto a la prohibición violenta de toda actividad política con repercusiones más allá de los marcos puramente estudiantiles. La promulgación de esta Ley Orgánica es una demostración más de que los dictados del imperialismo norteamericano siguen encontrando oídos receptivos en las altas esferas castrenses del Perú.

Así lo demuestra, además, el hecho de que la CIA continúe desplegando su acción como si tal cosa. Conserva su Oficina de Coordinación incrustada en el propio Ministerio de Gobierno y hasta el mismo SIM (Servicio de Inteligencia Militar) no ha tenido fuerzas suficientes para desalojarla, por lo menos del edificio. El país está plagado de agentes yanquis, los cuales circulan libremente, como Pedro por su casa. En diciembre pasado trascendió un hecho que demuestra el desenfado con que estos elementos actúan en Perú. Un hombre, cuya identificación nadie pudo precisar posteriormente, llegó al aeropuerto “Jorge Chávez” a esperar el paso de un avión que seguiría rumbo a Brasil. Llevaba un cartapacio negro. De pronto aparecieron tres individuos que lo golpearon ferozmente, al punto que perdió el conocimiento y dejó una huella de sangre mientras era arrastrado hacia un automóvil que esperaba con el motor encendido. Mucha gente presenció esta escena, pero nadie se atrevió a intervenir, sabiendo que la CIA goza de protección oficial. Tomaron el número de la patente del automóvil. Inmediatamente se supo que pertenecía a la dotación de automóviles de la Embajada de Estados Unidos. Algunos diarios

publicaron la noticia. El embajador yanqui desmintió terminantemente este hecho. Pero como los testigos sobaban, el mismo embajador debió reconocer posteriormente que efectivamente se había producido un suceso singular en el aeropuerto, pero que él había sido protagonizado por los "hijos de dos funcionarios diplomáticos", muy amigos de hacerse bromas entre sí. Todavía no ha surgido nadie en Perú que crea esta versión, pero los militares, muy serios para pontificar sobre soberanía nacional, han preferido hacerse los desentendidos. Justo es reconocer, sin embargo, que fueron funcionarios de la SIM los que se encargaron que algunos periódicos dieran a conocer la exacta versión de lo ocurrido.

INFLUENCIA DEL EJEMPLO

El embajador norteamericano, John Wesley Jones, ha pasado por momentos amargos desde que Belaúnde fuera desalojado. Cuando el ex presidente firmó el Acta de Talara, Wesley Jones, no tuvo motivos para protestar, por cuanto los intereses de la IPC quedaban perfectamente resguardados y aun hacía un espléndido negocio al conservar la refinación y comercialización del petróleo. Y cuando la Junta movilizó sus tropas a los yacimientos de La Brea y Pariñas y el complejo industrial de Talara, el asunto no le gustó, pero pensó en que las cosas se arreglarían con el transcurso de los días, tal como ha sido la práctica en tantos países latinoamericanos. Poco a poco la situación se le fue tornando gris, no tanto por lo que significaba el problema petrolero en términos exclusivamente monetarios, sino porque la Junta Militar parecía no preocuparse demasiado en "cuidarle la imagen" al imperialismo. Por el contrario, denunciaba a una poderosa empresa yanqui de operar en Perú con grave daño para el interés nacional. El problema principal consistía, y consiste, en que este ejemplo se extendía hacia otros países cercanos, lo que pudiera provocar una reacción en cadena, de contenido nacionalista. Por ejemplo: el próximo año habrá elecciones presidenciales en Chile y si Velasco puede nacionalizar una riqueza tan importante como el petróleo, sin que por ello le ocurra nada malo —y, por el contrario, se atrae el apoyo de la gran mayoría del país— ¿con qué cara un candidato "progresista" a La Moneda podría proponer una medida tan tibia como "la chilénización" del cobre? Si los peruanos ubican el problema en la nacionalización y lo solucionan, resultará muy difícil que un candidato popular presente esta medida como "impracticable".

Es por eso que en los Estados Unidos resuenan airadas voces reclamando contra Perú una medida "ejemplarizadora". El ex Secretario Auxiliar de Estado para Asuntos Interamericanos, Thomas Mann, propuso convertir el problema de la ICP en un "caso ejemplar", a fin de que en Latinoamérica no se "molesté" más a los inversionistas norteamericanos. Todos sabemos que los yanquis no son muy "delicados" en la aplicación de su escarmiento; al respecto, valgan dos ejemplos frescos: el bloqueo contra Cuba y la invasión

de República Dominicana. La intervención militar directa, con todo el espanto que ella lleva consigo, no anda muy alejada de la mente de algunos elevados personajes norteamericanos. Por lo pronto, dos conspicuos senadores, Longfellow y Packard, han reclamado insistentemente la agresión militar contra Perú, sin detenerse a esperar que se cumpla el plazo del 9 de abril para que Nixon aplique las represalias económicas contempladas en la Enmienda Hickenlooper.

Se trata de un plazo fijo y establecido por ley, es decir, Nixon debe cumplirlo. Aquí es donde el asunto comienza a adquirir otra dimensión. Porque, según como se observa el problema, Estados Unidos aparece como si un pequeño país sudamericano, al que siempre había considerado como una especie de "coto de caza" para sus inversionistas, lo hubiera puesto en jaque y muy cercano al "mate". Si aplica las represalias, puede desencadenar un verdadero incendio social no sólo en Perú sino en varios países latinoamericanos; si no las aplica, entonces crea el precedente de que se pueden rescatar las riquezas nacionales sin que le ocurra ninguna desgracia al osado que se atrevió y, muy por el contrario, éste resulte políticamente fortalecido. En la práctica Nixon está como el "garrido garzón con el acero clavado muy cerca del corazón... Si me lo quitas, me matas; si me lo dejas, me muerdo".

Hasta el momento no se advierte temor en las esferas gubernativas peruanas ante la eventualidad de sufrir las represalias norteamericanas. Por el contrario, podría afirmarse que lo que se observa es la reacción inversa: firmeza y hasta quizás pudiera advertirse un deseo de que Estados Unidos saque el puñal que guarda bajo el poncho. El general Velasco, en una reciente reunión celebrada con la directiva de los sectores industriales, confidenció su decisión de no echar pie atrás si Estados Unidos decide aplicar la Enmienda. "Y si es necesario —enfaticó— cierro las fronteras del país, pero no nos entregaremos...".

La famosa Enmienda ordena al gobierno yanqui cortar la ayuda económica a todo país que se atreva a expropiar una inversión norteamericana sin una "pronta y adecuada" compensación. Para esto establece un plazo máximo de seis meses, contado desde el día en que se practicó la expropiación.

El gobierno peruano no sólo no indemnizó a la IPC sino que encima le cobró 974 millones de dólares por impuestos que esta compañía había venido birlando al estado desde el momento en que inició sus operaciones. (Conviene tener presente que las instalaciones de esta compañía en Perú se avalúan solamente en una suma cercana a los 100 millones de dólares).

La IPC no se inquietó demasiado, en un comienzo, pensando en que una buena cantidad de dólares entregados oportunamente puede hacer que cualquier hombre de gobierno modifique su criterio y domine sus impetus nacionalistas. Pero ahora no le fue bien. Sin embargo, estuvo a punto de anotarse un "goal" jurídico cuando presentó un recurso de Habeas Corpus ante una sala de la Corte

Superior de Lima (semejante a la Corte de Apelaciones). Naturalmente, ubicó muy bien la Sala: de los tres ministros integrantes, dos eran del Apra.

Estos magistrados —como abundan en todas partes— tan serios y graves para defender la majestad del poder que representan, no se demoraron mucho en redactar un fallo dándole la razón al IPC y contrariando, por tanto, el interés del país. Pero, antes de que este fallo fuera hecho público, apareció un coronel que se entrevistó con los magistrados más solemnes y les dio a conocer un decreto que el gobierno pensaba dictar y que, entre otras cosas, fijaba un límite de edad para ocupar los cargos de jueces. “Casualmente” ese decreto significaba la cesantía para todos esos magistrados tan “intachables”. No hubo ni carrasperas de protesta: inmediatamente la sentencia fue modificada y el gobierno encarpétó el decreto. Los jueces sabían que los militares no se andaban con bromas y que hacía mucho tiempo que los tenían ubicados en la mira de sus inquinas. A muchos de los “escribanos”, actuarios y otros oficiales de la administración de justicia, que constituían una verdadera plaga nacional, se les expulsó violentamente, ante la sola denuncia de abusos cometidos por ellos contra personas modestas. Los jueces tuvieron que tragar saliva y no abrieron sus bocas, mientras veían cómo se iban a la calle muchos de sus subalternos que les eran tan útiles para sus manejos oscuros.

COMPANÍA ESTAFADORA

De todas maneras, el problema con la IPC no es un asunto que pueda ventilarse ante un tribunal ordinario. Por lo pronto, el gobierno peruano señala que dicha compañía no es norteamericana, puesto que fue constituida en Toronto (Canadá) y que la nacionalidad de una empresa no se determina por sus integrantes sino por el lugar en que la sociedad fue constituida. Y el estado bajo el cual se constituyó es el que puede, legalmente, entregarle su protección. En este caso de la IPC tendría que ser el gobierno canadiense. Hasta ahí todo estaría bien, si no fuera porque alrededor del 99% de las acciones de esta compañía pertenecen a inversionistas yanquis, propietarios de la Standard Oil de New Jersey.

Además de los 974 millones de dólares, el estado peruano cobra otros 17 millones por estafa. Resulta que, para no entorpecer el abastecimiento normal de combustible, la Junta permitió que la IPC continuara con la distribución del petróleo, aún después de la nacionalización. La compañía no se hizo de rogar y convirtió en dólares la suma recaudada en un lapso de 3 meses y posteriormente quemó sus libros y ordenó la fuga de sus representantes principales. También se preocupó de vender a “precio de gallina flaca” una flotilla de más de un centenar de automóviles último modelo que había ingresado al país libre de impuestos.

En cuanto a la “ayuda” que debe ser cortada, según la Enmienda, esta se refiere a la cuota de azúcar que Estados Unidos compra a Perú a un precio mayor en dos centavos de

dólar la libra al que rige en el mercado libre (consecuencia del bloqueo a Cuba). En total, se trata de una suma de 45 millones de dólares anuales.

La otra “ayuda” nunca ha sido tan sustanciosa como para echarse a llorar por su ausencia. Entre 1960 y 1965, alcanzó un promedio de 17 millones de dólares anuales, lo que para Perú es una bicoca. En la práctica, esta famosa ayuda ya se había suprimido; por ejemplo, al Banco Industrial le suspendieron un crédito por 6 millones de dólares, de los cuales buena parte había girado.

El problema también hay que mirarlo desde el ángulo de lo que los inversionistas yanquis en Perú pueden perder en caso de que la Junta decida extender sus manos sobre otras posesiones norteamericanas, especialmente en la minería, que ha sido la presa preferida. Hasta 1966, de un total de 613.8 millones de dólares invertidos en Perú, el 67,7% (416.2 millones) había sido atraído por la minería. Sólo 70.3 millones de dólares corresponden a la industria manufacturera.

Analizado el problema desde un punto de vista internacional, resulta que la inversión yanqui en Perú es la más rentable (produce mayores dividendos) que cualquiera otra radicada en país latinoamericano. Esto explica, entonces, por qué el conflicto con la IPC no ha logrado cortar el apetito de otros inversionistas yanquis. El propio gobierno peruano informó que nuevas empresas norteamericanas proyectan invertir 61,5 millones de dólares en la industria del petróleo: Belco Petroleum Corporation of Perú, Mobil Oil Co Union Oil, Peruvian Oils and Minerals, Cerro Pasco Petroleum Corporation y Ganso Azul Ltda. También se anunciaron próximas inversiones norteamericanas en el cobre: 320 millones de dólares en tres años.

Es por eso que la Junta Militar insiste en que Perú no tiene ningún problema con Estados Unidos, sino con una compañía en particular que carece de la nacionalidad estadounidense. Y afirma que no piensa extender su acción nacionalizadora hacia otras inversiones extranjeras, no obstante que la IPC se ha encargado de publicar en diarios yanquis y europeos que el Perú ya no ofrece la tranquilidad y garantías que necesita el capital foráneo.

Naturalmente, este conflicto con la IPC es el principal problema que afronta actualmente Perú respecto de Estados Unidos. Pero no es el primero de los últimos tiempos. USA empezó a disminuirle a Perú el “chorrito” de la ayuda cuando la Fuerza Aérea resolvió comprar 16 aviones “Mirages” en Francia, en vista de que USA no quiso venderle los F-5 que solicitaba. La compra se hizo durante Belaúnde y costó 42 millones de dólares al erario peruano. De esta manera, Perú conservó su primacía aérea en el continente que tanto le preocupa (los “Mirages” habían adquirido mucho prestigio debido a que fueron utilizados por los iraelies para derrotar a los árabes). Según confidencian altos círculos diplomáticos, esta compra de “Mirages” había sido acordada conjuntamente con Argentina, puesto que en los planes bélicos que entretienen a los estrategos peruanos figuraba el empleo de “Mirages” para “atacar” a

Chile y, como no alcanzarían a volver a reabastecerse a territorio peruano, debían pensar en hacerlo en Argentina, para lo cual era necesario que este país contara con los elementos aptos para abastecimiento y mantenimiento rápidos. Posteriormente, Argentina no compró "Mirages", sino que obtuvo F-5, con lo cual los estrategos habrán debido modificar sus planes primitivos. También durante Belaúnde, Perú adquirió tanques A-M-X. Argentina compró de los mismos. Es claro que con los tanques no sucedería lo mismo que con los "Mirages", por razones obvias.

Otro encontrón con los intereses yanquis fue la aplicación de la ley de Reforma Agraria sobre 19 de los 24 fundos que explotaba la Cerro Pasco Corporation. La expropiación (246.716 hectáreas) comprende a 29 comunidades campesinas que ahora tienen esperanzas ciertas de ser propietarios de las tierras. La Cerro Pasco avaluó sus instalaciones en 2,5 millones de dólares y el ganado lanar y vacuno (49 mil cabezas) en 4,5 millones de dólares. A la Junta se le ha criticado porque no aplicó la reforma agraria sobre todas las tierras de la Cerro Pasco (culpando de ello especialmente al Ministro de Agricultura, Gral. Benavides), pero hay quienes señalan que, a pesar de todo, esta expropiación significa un hecho sin precedentes en la historia del Perú.

RELACIONES CON LA URSS

Otros motivos de roce son el conflicto por la soberanía sobre las 200 millas marítimas (caso de los pesqueros norteamericanos) y, especialmente, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS, Rumania, Hungría, Polonia y Checoslovaquia.

El hecho de que haya sido la Junta Militar la que saliera al encuentro de las relaciones con la URSS significa un cambio muy importante, si se tiene en cuenta que Belaúnde hasta se negó a permitir la entrada al país al poeta soviético Evtushenko. Sin embargo, poderosos sectores de la economía privada peruana (especialmente pesqueros) ya conocían perfectamente las bondades del comercio con los países socialistas. Muchos de ellos hacían llegar sus productos a la URSS a través de intermediarios (alemanes occidentales), más o menos que ocurría con el cobre chileno antes de la reanudación de relaciones.

La URSS ha enviado a Perú una delegación integrada por representantes de 4 tipos de empresas de exportación especializada: textiles (lana y algodón), maquinaria pesada, (especialmente de construcción), maquinaria agrícola y construcción de carreteras y camiones, automóviles, bicicletas, motocicletas, etc.

La URSS ha manifestado su interés por el café, minerales, conservas, frutas tropicales, etc. También por lana. Para una fase posterior se contempla ayuda técnica y financiera, en virtud de la cual la URSS montaría fábricas con técnicos soviéticos. La forma de pago será en plazos de 8 a 10 años, con un interés de 3 a 3,5% anual. En cuanto a la eventual supresión de la cuota azucarera al Perú, por parte de USA, no existe por el momento la posibilidad de que la URSS absorba este producto, por cuanto ya se ha convertido, a su

vez, en un exportador bastante poderoso (exporta un millón de toneladas anuales).

La derecha peruana no ha visto con buenos ojos estas relaciones con el mundo socialista. Haya de la Torre se desgañita gritando que Perú se entrega a las "garras del oso soviético". Para desalentar a los productores peruanos, comenzaron a afirmar que este comercio con la URSS sería a base de trueque. Pero el gobierno militar ha declarado enfáticamente que él se realizará con moneda de libre convertibilidad.

En estos momentos el Perú muestra mucho interés en establecer estrechas relaciones comerciales con Rumania. Ello se debe a que necesita renovar las viejas instalaciones petroleras de la IPC y a que las empresas occidentales, que pudieran venderle lo que precisa, pertenecen a los consorcios del petróleo que dominan los yanquis a su amaño. No ocurre eso con Rumania, que posee excelentes equipos petroleros (es el segundo productor de Europa).

El canciller Mercado Jarrín explicó que Perú había tenido dos razones fundamentales para abrir relaciones diplomáticas y comerciales con los países socialistas: "De un lado —dijo— la evidencia de que no es posible permanecer ajeno al trato con una inmensa y poderosa realidad política de nuestro tiempo; y, de otro, la necesidad y la conveniencia que reviste para el Perú la apertura en forma directa de un nuevo campo para su comercio exterior, con la consiguiente ampliación de mercados para sus productos y la diversificación de las fuentes de cooperación que requiere, tanto en el campo del desarrollo industrial cuanto en el del progreso tecnológico y científico. Consideramos que debe irse a una universalización de nuestras relaciones diplomáticas, sin otra limitación que las conveniencias del país, sus posibilidades económicas y los convenios suscritos".

BALANCEO DE LA JUNTA

Al enfrentar enérgicamente a un imperio económico tan fuerte como es la Standard Oil e iniciar medidas de claro progreso, como es el establecimiento de relaciones con "algunos" países socialistas, la Junta Militar sin embargo se cuida de no aparecer ante la opinión mundial como lanzada en un "despeñadero" revolucionario. Sabe que el imperialismo norteamericano muchas veces no necesita de cañones para derribar un gobierno; le bastan sus agencias informativas y la retención de un puñado de dólares. Naturalmente, habría que padecer de un exceso de imaginación para encontrar algún parecido entre el general Velasco y un gobernante revolucionario como Fidel Castro, por ejemplo. Pero eso no es obstáculo serio para la UPI y AP cuando se trata de deformar la imagen de quien no es plenamente simpático a los intereses yanquis. Por eso, es posible apreciar un claro "balanceo" en numerosas decisiones de la Junta Militar. Cada vez que hace algo que puede molestar a USA tiene el buen cuidado de equilibrarlo con alguna medida que pueda computarse a su haber en el libro de cuentas del Depto. de Estado. Algunos ejemplos:

a) Como embajador en Estados Unidos de-

signa a Fernando Berckemeyer, uno de los hombres de más clara posición reaccionaria, al punto que Nixon dijo de él que sería un buen "embajador yanqui" en cualquier lugar del mundo. Es casado con una norteamericana millonaria y además es un suertudo importador de productos norteamericanos. Pero, al mismo tiempo que hace esta designación, nombra como su abogado para que defienda la posición del Perú frente al Habeas Corpus presentado por la IPC, a Alberto Ruiz Eldredge, Decano del Colegio de Abogados y ex candidato a la Presidencia, postulado por el Movimiento Social Progresista, de clara tendencia de izquierda. Este nombramiento provocó el horror de la reacción peruana, la que como es natural, batió palmas ante la designación de Berckemeyer.

b) Mientras el General Velasco cosecha aplausos de las clases más desamparadas cuando asegura que la revolución se ha hecho "para salvar al pueblo de la miseria y el hambre", designa Director del Trabajo a Carlos Neyra Caballero, estrechamente vinculado a los intereses patronales, como que ha sido nada menos que asesor laboral de la Casa Berckemeyer, de Cemento Portland, de Marcona Mining y de Minas Acari.

c) El mismo día en que arribó a Perú la Misión Comercial soviética y el Depto. de Estado anunciaba públicamente la Enmienda Hickenlooper, el gobierno iniciaba el juicio en contra de 56 campesinos acusados de participar en las guerrillas que, en 1965, habían operado bajo la dirección del MIR. Se trató de un proceso dramático, que puso nuevamente de relieve la horrible realidad agraria peruana.

Uno de los jefes militares que integraba el tribunal era nada menos que el dueño de las tierras donde trabajaban estos modestos campesinos, muchos de los cuales apenas entienden el castellano (hablan quechua). Para mantener un mínimo de decoro, este militar debió abandonar el estrado en pleno juicio. La revista "Caretas", que de ninguna manera pudiera calificarse de adicta a la lucha guerrillera, describió así algunos aspectos de este proceso: "Hay expectativa por escuchar al hombre del que un diario local dijo: 'El modesto campesino convertido en fiero guerrillero por Máximo Velando y Froilán Herrera'. El fiscal ha pedido 20 años de prisión para él. Parece cualquier cosa menos fiero. Casi no entiende las preguntas que se le hacen. Se enreda. Buscan a alguien que entienda quechua. Tampoco sirve de mucho. No es sólo cuestión de idioma. Aquí hay dos mundos paralelos que rara vez se encuentran: el de los jueces, periodistas, público, inclusive defensa, y el de un campesino que apenas si tiene un concepto del tiempo, del Estado, de las distancias, del mundo moderno". Más adelante, en esta misma crónica, la revista mencionada reproduce el interrogatorio del acusado más anciano, Sixto Miguel Yanto (78 años): "¿Me entiende usted? ¿Entiendes la pregunta? Es la interrogante que más se escucha.

—"¿Dónde te dieron la granada los guerrilleros?", pregunta Gálvez

—"Por eso, pues; no pues, señor, responde el campesino".

—"¿Te la dieron en la loma?"

—"No, pues, señor".

—"¿Dónde? ¿Entiendes? ¿Dónde te la dieron para que tiraras?"

—"Ninguna, pues, me dieron".

—"Pero tú dijiste que te dieron una granada".

—"Por eso, pues, señor; ninguna granada me la dieron".

Por lo menos a estos campesinos los están juzgando recién. Porque en Perú es usual que los procesos (sobre todo los políticos) se eternicen durante años, sin que los "severos" magistrados muestren la menor inquietud por estas irregularidades manifiestas. Todavía están esperando juicio los presos Hugo Blanco, Ricardo Gadea y Héctor Béjar, además de otros luchadores revolucionarios. Si los militares luchan por la defensa de la "peruanidad", no deberían olvidar que Blanco, Gadea y Béjar son más peruanos que cualesquiera de los agentes de las empresas norteamericanas que siguen llenándose las faltriqueras.

Tal vez pudieran pensar que de esta manera ponen un muro de contención a la efervescencia social que está invadiendo a todos los países explotados de esta parte del mundo. El Perú no es ajeno a esta realidad continental. Héctor Béjar, desde su prisión en San Quintín (Lima), abordó estos puntos durante una entrevista con la revista "Oiga" y PF a raíz de haber ganado el Premio de Ensayo "Casa de las Américas" (1969): "En el Perú, a partir de 1965, y desde antes aún, desde las primeras acciones armadas de Hugo Blanco, Javier Heraud y el teniente Vallejo, se ha abierto una nueva etapa de lucha revolucionaria. Vivimos en estos momentos las consecuencias de los primeros fracasos, pero el fermento sigue y eso es lo importante. A la vez, el país marcha hacia una enrucijada social, económica y política. Los reformistas burgueses se han dado cuenta de eso y están librando una batalla contra el tiempo... y contra la historia, porque llegarán demasiado tarde. Nuestro país marcha hacia agudas confrontaciones sociales y los revolucionarios de hoy nos encontramos, en cierto modo, como los de los años 30: sumergidos en una crisis que ya se anuncia, pero poco preparados para ella porque nos hemos aislado del pueblo. Hay pues una responsabilidad que debemos asumir sin tardanza". (Ver Págs. 12, 13 y 14 de esta edición).

Por el momento, esa responsabilidad de que habla Béjar con verdadera autoridad moral, debería incitar a los revolucionarios peruanos a movilizarse sin miedo en torno al principal problema del momento: la lucha contra los petroleros yanquis. Lo peor que puede ocurrirles es que se equivoquen. Pero, si así sucediera, por lo menos se equivocarían en la acción ¿Y cuántas veces se han equivocado quedándose en la observación y en el análisis? La indudable falta de coherencia ideológica de la Junta Militar pudiera inducir a los revolucionarios peruanos a exigirle una definición doctrinaria antes que a impulsarla a enfrentar resueltamente al imperialismo. Perú tiene "doctrinarios" suficientes para exportar. Con los textos que han escrito pudiera llenarse un cuarto entero, el mismo que Atahualpa ofreció colmar de oro a los conquistadores de Pizarro. Y no por eso el Inca salvó su vida. Es inmenso el valor de la ideología

correcta en la conducción de los movimientos sociales; pero, también pareciera que en América latina se ha ido creando la costumbre entre algunos "teóricos de la revolución" de constituirse en una especie de Comisión Examinadora de los actos ajenos. Seguramente ante ellos la Junta Militar no aprobaría ningún examen. Pero el quid del asunto tiene que ver con los hechos concretos y, por ahora, con el problema del petróleo. Y ahí es donde hay que poner el acento. Porque bien pudiera ocurrir que el propio imperialismo norteamericano, aunque parezca paradójico

(y no sería la primera vez en América) sirviera de motor que acelerara la radicalización de la Junta Militar. Si Estados Unidos aplica drásticamente la Enmienda Hickenlooper, precipitará al Perú hacia la "encrucijada" de que habla Béjar. Y ello creará nuevas y urgentes tareas para los revolucionarios. No sólo para los de Perú, sino también para sus vecinos, porque lo que allí puede suceder será muy difícil enmarcarlo dentro de las fronteras nacionales.

CARLOS JORQUERA TOLOSA
(Enviado especial)

★ A LA REDACCION de PF llegó el siguiente comunicado del Movimiento de Liberación Nacional uruguayo "Tupamaros":

El Comando "Mario Robaina Méndez" del M.L.N. declara:

Que se ha enterado por la prensa que dentro del dinero adquirido en la expropiación del Casino "SAN RAFAEL" —operación de la que se hace responsable—, existe una parte que pertenece a los trabajadores de dicha casa de juego.

Que el Comando tiene en cuenta el Reglamento Moral del MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL ("TUPAMAROS") que —en materia de expropiaciones señala lo siguiente:

"Debemos hacer una distinción clara entre el significado que debe tener para nosotros la propiedad burguesa y la propiedad de los trabajadores. La primera es —sin duda—, mal habida, amasada con la explotación de los trabajadores; la segunda es el resultado del esfuerzo y del trabajo personal".

"Es por lo tanto la propiedad burguesa nuestra fuente natural de recursos y nos reservamos el derecho de expropiarla sin retribución alguna. La revolución se sirve de lo que a los privilegiados les sobra".

"Con la propiedad de los trabajadores, pequeños comerciantes y pequeños productores, debemos proceder con absoluto respeto y —cuando por razones de fuerza mayor nos veamos obligados a utilizarla—, procuraremos que el daño sea mínimo".

"Este último tipo de expropiación deberá ser indemnizada de inmediato, tan pronto como nuestro grado de desarrollo lo permita, debiéndose para ello crear un mecanismo de reintegro".

Que también tenemos en cuenta la filo-

sófia irresponsable del Gobierno en materia de retribuciones a los trabajadores y en materia de manejo de los dineros del pueblo. (La reciente acción de nuestros compañeros del Comando "LIBER ARCE" ha demostrado, fehacientemente, la implicancia de los actuales gobernantes en los negocios más sucios y la falta total de escrúpulos que los ha llevado —incluso— a incendiar las pruebas sin detenerse siquiera ante el riesgo de vidas que dicho acto produjo).

De acuerdo a estos principios y consideraciones, el Comando "MARIO ROBAINA MENDEZ" del M.L.N., está dispuesto a devolver el dinero perteneciente a los trabajadores del Casino, con las garantías siguientes:

1.— Liquidación exacta del monto de estos haberes, hecha pública por los propios empleados.

2.— Designación por parte de los mismos de persona representativa para recibir el dinero, y amplias garantías de seguridad para su entrega.

3.— Declaración pública de las autoridades policiales o quien corresponda, de que el dinero devuelto será imputado exclusivamente al reintegro de haberes de los empleados del Casino "SAN RAFAEL".

SI NO SE CUMPLEN ESTRICTAMENTE ESTAS CONDICIONES, NO HABRA DE SER POSIBLE LA DEVOLUCION.

Por el MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL ("TUPAMAROS").

COMANDO "MARIO ROBAINA MENDEZ".

Uruguay, marzo de 1969.

El caso de los expulsados de Chile

Frente a la expulsión de los 14 profesores argentinos ordenada por el gobierno chileno, numerosos comentarios aparecieron en la prensa internacional. En la revista "Marcha", el periodista argentino y colaborador de PF, Gregorio Selser, escribió el artículo siguiente del cual damos los aspectos principales:

POR último y lamentablemente, consideraciones de política menuda se impusieron a las muy trascendentes referidas al progreso científico y cultural, y los catorce profesores argentinos fueron conminados a abandonar Chile en un plazo perentorio. Al momento que escribimos estas líneas, seis de ellos se encuentran ya en la Argentina.

Pese a que la prensa argentina transmitió en líneas generales el texto de los cables de agencias internacionales raspando o limando la taimada acusación de "espionaje", fue éste el concepto predominante en las versiones periodísticas chilenas. A la prensa tradicional argentina, incurablemente marcartista, le resultaba, por razones obvias, mucho más agradable explotar la veta de la "conspiración de izquierda" —casi no mencionada en Chile, o apenas sugerida— como factor detonante en la actitud del gobierno de Frei. Pero ambas versiones más bien se daban de patadas entre sí, porque si los profesores incriminados ejercían el espionaje presumiblemente por cuenta o en favor del gobierno argentino, curiosos izquierdistas serían, a menos que actuasen como agentes dobles, cosa que a ningún diario chileno se le ocurrió mencionar; si, por el contrario, por su presunta condición de "comunistas" habían sido obligados por la dictadura argentina a emigrar a Chile, sería igualmente curiosa su manera de vengarse de Onganía, ejerciendo el espionaje en su favor.

A esta altura de los hechos y por las declaraciones de los incriminados y su digna actitud compartida por profesores y alumnos del país hermano, hay suficientes elementos de juicio como para colegir que las dos vertientes informativas, más que infantiles, resultan imbéciles y que en el fondo de esta comedia de equívocos y malintencionalidad se juega un vulgar episodio de trezta politiquera universitaria de la más ramploña categoría. Su motivación real es el temor de ciertos profesores chilenos a ser desplazados por los "intrusos" argentinos, sus colegas del campo de las ciencias exactas. Su ejecutor e inspirador fue el profesor Igor Saavedra, miembro del consejo del Departamento de Física, que se valió sobre todo de su función de asesor científico del Consejo de Seguridad chileno —equivalente al CONASE argentino y cómo éste fuertemente prejuiciado en varios terrenos lindantes con la ideología y la irracionalidad xenófoba— para exprimir los jugos patrióticos habitualmente a flor de piel entre los chilenos y soliviantarlos con su insidia, tan improbable como lastimosa.

El semanario argentino "Panorama", repi-

tiendo las peores técnicas de "Primera Plana" especialmente para con aquellos que no pueden defenderse, burlándose de ellos o aprovechándose de su indefensión, elige la versión de la reaccionaria derecha de la democracia cristiana y postula que los profesores "autoexilados" o, también, "segregados", tendrán ahora "un test para probar la eficacia de la revolución universal por la ciencia".

Lo de "autoexilados" pretende ser una broma, pero esconde la vergüenza nacional de la cual Argentina aún no se ha reivindicado: la de la ominosa noche de fines de julio de 1966, cuando bajo la dirección de un general en actividad se apaleó y vejó a estudiantes y profesores inermes dentro de las aulas universitarias, proveyendo a la historia viva de nuestra América de un episodio más de cómo se las gastan ciertos militares cuando tienen mando y ocasión de ejercerlo en relación con sus compatriotas. "Panorama", que al servicio de cierto "desarrollismo" pretendidamente nacionalista cultiva últimamente el arte de ser grato a la dictadura, omite consignar en su crónica que fue consigna general de los apaleados —y en buena parte sangrantes— profesores no emigrar a Estados Unidos, la solución más fácil puesta a su disposición, sino permanecer en el país hasta donde fuese posible si otras actividades privadas podían permitirselo; omite también señalar el gesto —por otra parte nada secreto— de aceptar contratos fuera del país a condición de que fuesen propuestos por países latinoamericanos no gobernados por dictaduras militares, y que se mantuviese la cohesión de los grupos de investigadores para no malversar el logro más difícil de obtener en un país subdesarrollado: el de formar equipos de investigadores, técnicos y especialistas de disciplinas científicas y universitarias.

Sólo en razón de ese compromiso moral se explica la presencia de colonias más o menos numerosas de universitarios argentinos en Chile, Perú, Venezuela y, en menor proporción, en Uruguay y México. En Venezuela cierta contratación de profesores "agregados" —¿por qué no ahuyentados por la "persuasión policial", señores de "Panorama"?— estuvo ligada al compromiso, por parte de ese país, de aceptar como becarios a cierto número de alumnos argentinos que estaban terminando su alta especialidad con aquellos profesores. También Chile acogió con beneplácito la idea de que el grupo contratado llevase consigo a seis alumnos argentinos de los últimos años, para completar estudios en Santiago.

El cambio de humor oficial trasandino se hizo público en diciembre de 1968, cuando inesperadamente el ministro y el subsecretario de Educación revelaron la imposibilidad de "encontrar" 1.700.000 escudos indispensables para pagar un año de sueldos de los 78 profesores docentes e investigadores argentinos contratados por la Universidad de Chile

y por la Universidad Técnica del Estado. "Simplemente, no hay plata. Lamentablemente tendrán que buscar ellas (las universidades) cómo pagar". Para un presupuesto universitario anual estimado en 300 millones de escudos, parece de poca monta un problema de menos del uno por ciento de aquella suma. Las universidades, por su cuenta y a pedido de los alumnos chilenos (y de no pocos docentes e investigadores) buscaron y encontraron fondos para tres meses de sueldo y pidieron al Gobierno que se hiciera cargo de los nueve meses restantes. Pero el Ministerio parecía irreductible. El subsecretario, Mario Leyton, alegaba: "Tenemos que ceñirnos al presupuesto y no hacer castillos en el aire". Y explicaba: "Tenemos un compromiso irrenunciable con la educación básica y media nacional, especialmente en construcciones escolares, ampliaciones de equipos, atención y perfeccionamiento pedagógico. Atender por un año más el convenio con los profesores argentinos nos resultaba oneroso y nos plantea la disyuntiva de descuidar la educación general para atender la altamente especializada".

Esto era antes de que ciertos funcionarios descubrieran de pronto la peligrosidad de los docentes argentinos y el riesgo que su presencia entrañaba para la seguridad de Chile; después, cuando el profesor Igor Saavedra perdió una posición clave en el seno del consejo del Departamento de Física, en vista de que dos profesores argentinos votaron contra él en un proceso normal de todo manejo administrativo universitario, arrebataron los rumores difusos sobre la "inconveniente" presencia de los argentinos en Santiago. A fines de enero de 1969, durante una reunión del consejo indicado, con quórum estricto, se resolvió pedir a los profesores argentinos que no interviniesen en el manejo del Departamento por su condición de extranjeros. El único argentino presente en la sesión, que se abstuvo de votar, advirtió empero que él y sus compatriotas no actuaban

en la Universidad de Chile como argentinos, sino como profesores universitarios, sin otros privilegios y deberes que los resultantes de los estatutos, a los que siempre se habían sometido y a los que pensaban continuar ajustándose. Esta puntualización legalista provocó, de hecho, la decisión gubernamental para la cual coadyuvieron innegables influencias políticas del tipo electoral. Concretamente las del sector de derecha democristiano con valimiento ante el presidente Frei.

Resulta triste que haya tenido tan curioso colofón el fraternal gesto del pueblo chileno para con los profesores argentinos apaleados por las policías bravas en julio de 1966 y ahora espiritualmente apaleados por la injusticia de la acusación infamante y, para peor, no franca y explicitada, sino insidiosa y confusa, al calor de un precepto constitucional chileno que autoriza al gobierno a expulsar del país a quienquiera que sea, sin que para ello aparezca como indispensable dar razones de su proceder. No desazamos sumarnos a la campaña que, al socaire de ese erróneo gesto, pretende sumar nuevos agravios contra el hermano pueblo trasandino y avivar la hoguera chovinista y belicosa sargentescas. Creemos, en cambio, que es de justicia y es de moral rescatar la verdad de lo ocurrido, tanto para salvaguarda de honras y apellidos infortunadamente salpicados, y deleznablemente ofrendados al ara de las apetencias políticas contingentes no menos que superfluas, como para impedir la consumación de nuevos errores.

Porque cabe recordar que si bien los 14 profesores expulsados son prácticamente las cabezas de los grupos de trabajo de Ciencias Exactas, quedan aún otros 60 docentes de esa disciplina en ejercicio en Santiago, así como otros 3 en Filosofía, 10 en Ingeniería, 2 en Arquitectura, así como seis estudiantes becados. Que al menos ellos puedan concluir su alta misión, sin sospechas, sin rencores y sin nuevos, gratuitos e innecesarios agravios.

